

LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Morán Torres Enoc Francisco

Mesa V. Resolución de conflictos electorales y acciones afirmativas

En la actualidad, el Estado Mexicano y su democracia electoral enfrentan innumerables retos, uno de ellos es el relativo a la garantía de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Toda vez que si bien es cierto a nivel administrativo nacional se han dado avances importantes para dar mayor accesibilidad a la emisión del sufragio activo y a nivel jurisdiccional federal se han emitido sentencias en el mismo sentido además de hacer énfasis en acciones afirmativas para la postulación de candidaturas por la vía partidaria, aún existe un largo camino que logre garantizar el goce y ejercicio de los derechos políticos de un sector de la población que históricamente se ha enfrentado a barreras asimétricas y ha vivido una discriminación estructural.

En efecto, los derechos político-electorales son derechos humanos y, en términos del artículo 1° de la Constitución Mexicana, el Estado tiene la obligación de su promoción, respeto, protección y garantía. Por lo que, no basta con la previsión constitucional de los derechos políticos de la ciudadanía consagrados en el arábigo 35 con relación al diverso 1° ya citado, sino se generan las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que permitan al Estado la garantía de esos derechos y su Justiciabilidad máxime cuando se trata de personas que cuentan con alguna discapacidad en sus diferentes dimensiones. Ello, no implica que posean derechos distintos al resto de la población, sino que las condiciones para su ejercicio son diferentes.

Así las cosas, los obstáculos que entraña la garantía de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad demandan no sólo acciones inmediatas que vayan más allá de la construcción de estructuras normativas, de compromisos políticos de orden institucional o de espejismos democráticos sino también de la generación de mejores condiciones que permitan la transición hacia una democracia electoral que sea inclusiva.